

en la Secretaría de esta Corporación, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos del exámen y reclamación por los habitantes e interesados de este término, con arreglo a las disposiciones vigentes y, transcurrido dicho plazo, someterse a la ulterior aprobación de la Corporación, a los efectos procedentes.

Visto el expediente relativo a la modificación de la Tabla de Valores Unitarios para el cómputo del Arbitrio sobre incremento del valor de los terrenos, referida al próximo trienio 1.980 -1.982 y despues de una detallada información emitida por el Teniente Alcalde Sr. Montilla en relación con los cambios de zonificación elaborados, siendo lo más destacable la reducción de 16 zonas a 10 para la aplicación del referido Arbitrio, el Sr. Ribó Trujillo manifestó que, tratándose de un asunto de gran importancia para la población, estimaba procedente someter a información pública previa los cambios pretendidos, al efecto de recoger cuantas iniciativas se suscitaran por parte de los interesados, siendo apoyada dicha postura por el Teniente Alcalde Sr. Oller.

Los señores Alcalde y Teniente Alcalde Sr. Gascón Millán, manifestaron que dada la premura de tiempo a efectos de aplicación de dicho Arbitrio para incios del próximo año 1.980, no existía prácticamente plazo suficiente para dicho procedimiento, reconociendo, sin embargo, que durante el plazo reglamentario en que el presente expediente se encontrará a disposición del público para su información, debería convocarse a las entidades más representativas de la población al efecto de que aportaran su parecer e inciativas.

La Corporación, por unanimidad, acordó aprobar la Tabla de Valores Unitarios del Arbitrio sobre incremento del valor de los terrenos confeccionada para el trienio 1.980-1.982, y que la misma se someta a información pública por el plazo reglamentario.

Visto el contenido de la Moción presentada por el Presidente de la Comisión de Sanidad, relacionada con el sumario que se sigue en la Audiencia de Bilbao por delitos abortivos, que literalmente dice lo siguiente:

" El Concejal Presidente de la Comisión de Sanidad que suscribe, estima oportuno elevar a conocimiento del Ayuntamiento Pleno que:

El día 26 de octubre, a las 11 de la mañana, en la Audiencia de Bilbao, sección segunda, serán juzgadas once mujeres y un hombre por supuestos delitos de aborto.

Las penas solicitadas son las siguientes: para una de las mujeres sesenta años de prisión, para otra, cincuenta y cinco años, y para el resto seis meses y un día de prisión menor. Asimismo para todos once años de inhabilitación especial ( pérdida del derecho de elegir y ser elegidos para cargos públicos ).

Ocho de las mujeres están acusadas de haber abortado, otra de ellas por intentar y las otras dos por haber practicado los abortos.

Detrás de estas frías cifras hay un problema social que debe quedar muy claro a los ojos de todos. No podemos olvidar la situación social, personal y familiar de todas estas mujeres, trabajadoras o esposas de trabajadores con niveles de ingresos reducidos, residentes en una barriada industrial de Bilbao, todas en edades comprendidas entre los 31 y los 40 años, con dos o tres hijos, algunas enfermas o con hijos enfermos, que habían pedido anticonceptivos a los médicos de la Seguridad Social y éstos se los habían negado.

La detención de estas mujeres se produjo en el año 1.976 fechas en las cuales en este país la información y uso de anticonceptivos estaba penalizado por la Ley.

Las circunstancias solo-económicas en las que se enmarcan los hechos acontecidos en el Sumario de Bilbao no son excepcionales, se repiten en los miles de casos de interrupción de embarazos que tienen lugar en nuestro país.



Mujeres trabajadoras con niveles de ingresos reducidos, residentes en barrios con infraestructura urbanística sanitaria muy deficiente, con carencia absoluta de centros de información y planificación familiar que pongan a su alcance los medios y conocimientos técnicos para prevenir embarazos no deseados. A todo ello debemos añadir que existe una clara discriminación que se produce sobre las mujeres trabajadoras, ya que la carencia de medios les impide actuar como otras personas que disponiendo de estos medios realizan la interrupción del embarazo en condiciones de seguridad sanitaria, secreto social e impunidad ante la Ley, fuera de nuestro país.

Por todo ello este Ayuntamiento ha procedido a solicitar el indulto personal para todos los encartados en el juicio de Bilbao y creemos que es sumamente importante que exista un nuevo tratamiento legislativo sobre la cuestión del aborto.

Por otro lado deben darse las condiciones sanitarias necesarias para evitar el aborto; que todas las personas tengan centros de planificación familiar a los que acudir para la información y medidas técnicas anticonceptivas y que estos centros parte de la red sanitaria pública.

El Sr. Ribó Trujillo manifestó que no consideraba oportuno el tratamiento de este tema por el Ayuntamiento Pleno, máxime cuando lo único que se solicitaba era la remisión de un telegrama al Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia, considerando, por otra parte, que sería más positivo para nuestra localidad la adopción de acuerdo en el sentido de subvencionar la implantación de una serie de cursillos que versaran sobre educación sexual.

El Sr. Riba Romeva manifestó por su parte que contrariamente a la que opinaba el Sr. Ribó consideraba que era asunto a tratar por el Pleno ya que lo único que se pretende es la consecución de legislación más adecuada, manifestando asimismo que dicho objetivo debe considerarse urgente.

El Sr. Gascón manifestó que debería obtenerse la inclusión en la Seguridad Social del Servicio de Planificación Familiar.

El Sr. García García se adhirió a las manifestaciones del Sr. Gascón.

Seguidamente se sometió a información el contenido de la precedente Moción, aprobándose la misma por mayoría, salvando sus votos en contra los señores Ribó Trujillo, Riba Durán y Joaquín Ventura, acordándose, por tanto, remitir el correspondiente telegrama al Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia de Bilbao.

Visto el recurso de reposición presentado por Don José García Mateos contra acuerdo de esta Corporación de fecha 1 de junio de 1.979, por el que se facultó a la Alcaldía para que, a tenor de lo dispuesto en el art. 228 de la Ley del Suelo y art. 64 del Reglamento de Disciplina Urbanística, se imponga al mismo multa de 40.000 pesetas concediéndole un plazo de quince días para que lleve a término la demolición de unas obras no amparadas por licencia municipal, y resultando de lo informado por el Letrado Asesor que el principio de legalidad prima al de igualdad por lo que no es atendible, en el presente caso, la doctrina del precedente, la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo y por unanimidad, acordó desestimar en conjunto el recurso de reposición presentado por Don José García Mateos contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 1 de junio de 1.979 y que por parte del interesado se proceda, en el plazo de treinta días, a la demolición de la habitación construida en la terraza del inmueble, debiendo solicitar la correspondiente licencia para la demolición, con la prevención de que, en caso contrario, se procederá por la Administración a la demolición de la obra con gastos a cargo del interesado, y estimar el recurso en lo que se refiere a la imposición de multa de 40.000 pesetas, sí bien debe incoarse el correspondiente expediente sancionador, de conformidad con el art. 228 de la vigente Ley del Suelo, a los efectos de imposición de la sanción correspondiente.